

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO V

ACTUACIONES N°: 254/18
H103054261332
H103054261332

JUICIO: FALCON GONZALO EMMANUEL c/ LEON QUISPE FLAVIA s/
COBRO DE PESOS.- Expte. 254/18

San Miguel de Tucumán, 27 febrero de 2023

AUTOS Y VISTOS

Para dictar sentencia definitiva en este expediente caratulado “Falcón Gonzalo Emmanuel c/ León Quispe Flavia s/ Cobro de pesos”, expte. 254/18, sustanciado ante este Juzgado del Trabajo de la V° Nominación.

RESULTA

Mediante presentación del 16 de marzo de 2018 (fs. 28/32) se apersonó el letrado Cristian Marcelo Soria como apoderado del actor Gonzalo Emmanuel Falcón, DNI 35.815.551, domiciliado en calle N° 6 S/N, entre calles 39 y 41, mza. P, casa 6, Las Talitas, Tafí Viejo, según acreditó con el respectivo *poder ad litem* (copia a f. 2).

Expresó que siguiendo instrucciones de su mandante interpone demanda laboral por cobro de pesos en contra de Flavia León Quispe, CUIT 27-93780690-1, con domicilio en calle Junín N° 259, San Miguel de Tucumán.

Persigue el cobro de la suma de \$281.917,51 (pesos doscientos ochenta y un mil novecientos diecisiete con cincuenta y un ctvs.) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de indemnización por despido (artículo 245, LCT), indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/preaviso, días trabajados e integración del mes de despido, SAC s/integración mes de despido, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, SAC s/vacaciones no gozadas, diferencias salariales (de los últimos 12 meses) y artículo 80 de la LCT.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 55, inc. 3, del CPL, precisó que el actor prestó servicios con carácter permanente y bajo dependencia de la demandada desde el 17 de marzo de 2010.

Afirmó que se desempeñaba en el establecimiento de titularidad de Flavia León Quispe, denominado “La Bolsa”, sito en calle Junín N° 259, de esta ciudad, con tareas de Vendedor B, en jornadas que se extendían de lunes a sábados de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Indicó que percibía por su labor una remuneración mensual neta de \$8.250, inferior a la que le correspondía según la escala salarial de la actividad comercial (CCT 130/75).

Explicó que el vínculo laboral se extinguió por despido directo con invocación de causa, que el actor rechazó en tiempo y forma, por inverosímil.

Luego de transcribir el intercambio epistolar mantenido con la accionada, refirió a las actuaciones llevadas a cabo por ante la Secretaría de Estado de Trabajo (expediente N° 17.850) por las que intimó a aquella al pago de las indemnizaciones, diferencias salariales y remuneraciones de ley. Acotó que de dichas constancias se desprendía que la parte demandada no dio cumplimiento con el requerimiento de su mandante.

Practicó planilla de rubros e importes reclamados y ofreció prueba instrumental. Pidió la admisión de la demandada con costas a la contraria.

Adjuntó la documentación original (f. 38) de la que da cuenta el cargo del 12 de abril de 2018 (f. 39).

Corrido el traslado de ley, mediante presentación del 21 de diciembre de 2018 (fs. 57/61) se apersonó la letrada Noelia Karina Díaz, como apoderada de la demandada Flavia León Quispe, DNI 93.780.690, domiciliada en Av. Alem N° 1896, San Miguel de Tucumán, según acreditó con el pertinente instrumento (f. 56), y contestó la demanda.

Luego de negar en general y en particular los dichos vertidos por el actor, brindó su versión de los hechos.

Reconoció como cierto que el actor se desempeñó bajo su dependencia en el establecimiento comercial denominado “La Bolsa”, ubicado en calle Junín N° 259, de esta ciudad, cuya actividad es la venta de bolsas y objetos de plástico.

Sin embargo, dijo que el actor no ingresó a trabajar en favor de su mandante en la fecha por él denunciada, sino que lo hizo el 17 de febrero de 2014, tal como fue consignado en sus recibos de haberes.

Señaló que el demandante realizaba tareas de limpieza, ordenaba mercaderías y hacía mandados varios; sin perjuicio de haber ayudado, ocasionalmente, a los vendedores a embalar. Rechazó que el trabajador hubiera cumplido funciones de vendedor y acotó que la venta al público estaba a cargo, principalmente, de Joaquín Alejandro Cortez, encargado del negocio, y de otros empleados (Luis Alberto Ruiz y Rodrigo Carlos Quesada). En consecuencia, agregó, Falcón estuvo correctamente registrado como Maestranza, según el CCT 130/75, aplicable a los empleados de comercio.

Negó, asimismo, que el demandante hubiera cumplido jornadas completas de labor. Por el contrario, aseguró que trabajaba de lunes a sábados de 9:00 a 13:00.

Por último, dijo que su mandante despidió con justa causa al actor, mediante Carta Documento impuesta el 12 de diciembre de 2016, debido a la injustificada falta de colaboración y los insultos e injurias propiciadas al hijo de su mandante, Lucas Cortez Quispe.

Rechazó adeudar suma de dinero alguna al actor y, en consecuencia, opuso defensa de falta de acción. Ofreció prueba instrumental. Hizo reserva del caso federal y pidió el rechazo de la demanda.

Adjuntó la documentación original (f. 65) según consta detallado el 7 de marzo de 2019 (f. 66).

El 3 de junio de 2019 (f. 69) se ordenó la apertura de la causa a prueba al solo fin de su ofrecimiento. Del acta de audiencia de conciliación llevada a cabo el 8 de octubre de 2019 (f. 78) se desprende que comparecieron los letrados apoderados de ambas partes, sin arribar a acuerdo alguno. Se proveyeron las pertinentes pruebas.

Secretaría Actuarial informó sobre la producción de pruebas (8 de agosto de 2022), de donde surge que la parte actora ofreció: 1) Informativa (fs. 79/80, continúa digital): no producida. 2) Pericial contable (fs. 81/85, continúa digital): no producida. 3) Confesional (fs. 86/88, continúa digital): no producida. 4) Testimonial (fs. 89/93, continúa digital): no producida. Por su parte, la demandada ofreció: 1) Instrumental (fs. 94/95): producida. 2) Informativa (fs. 96/112): parcialmente producida. 3) Informativa (fs. 113/129): parcialmente producida. 4) Pericial contable (acumulada al CPA2): no producida. 5) Testimonial (fs. 130/157): producida. 6) Confesional (fs. 158/171): producida.

El 5 de septiembre de 2022 alegó de bien probado la parte actora; en tanto, la demandada no presentó el suyo.

Fueron llamados autos para sentencia, providencia que notificada a las partes y firme dejó la causa en estado de ser resuelta.

CONSIDERANDO

I. Analizada la cuestión traída a resolver surge de los términos de la demanda y el responde que constituyen hechos admitidos -expresa o implícitamente- por las partes y, por ende, exentos de prueba: a) la existencia del contrato de trabajo que vinculara a Gonzalo Emmanuel Falcón con Flavia León Quispe; b) los extremos del vínculo laboral relativos a la modalidad de contratación por tiempo indeterminado y la prestación de servicios en el local comercial que explota la accionada, denominado con el nombre de fantasía “La Bolsa”, sito en calle Junín N° 259, de esta ciudad; c) la autenticidad de los recibos de haberes acompañados con la demanda, y la autenticidad y recepción de las piezas postales intercambiadas por los litigantes, lo que surge de los hechos expuestos en la demanda y contestación; d) el egreso del trabajador por despido directo con invocación de causa, dispuesto por la demandada, formalizado mediante Carta Documento impuesta el 12 de diciembre de 2016.

En consecuencia, se tienen por reconocidos tales hechos y por auténticos los instrumentos mencionados, y por auténticas y recibidas las misivas referidas.

El análisis del reclamo efectuado se hará a la luz de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo (y sus modificatorias) y el CCT 130/75, en virtud de lo prescripto por el artículo 2°, inc. c, de dicha norma convencional y del principio de congruencia. Así lo declaro.

II. Las cuestiones controvertidas a dilucidar y de justificación necesaria, conforme al artículo 214, inc. 5, del CPCC, son las siguientes: 1) Extremos de la relación laboral relativos a la fecha de ingreso, categoría, jornada de trabajo y remuneración del actor. 2) Causa y justificación de la extinción del contrato de trabajo. 3) Procedencia o no de los rubros e importes reclamados. Defensa de falta de acción opuesta por la demandada. 4) Costas. Intereses. Planilla. Honorarios.

Primera cuestión: extremos de la relación laboral relativos a la fecha de ingreso, categoría, jornada de trabajo y remuneración del actor.

1. Reconocida la prestación de servicios del actor en favor de la demandada, controvierten los litigantes sobre los extremos que revistió el vínculo laboral en lo relativo a la fecha de ingreso, categoría, jornada de trabajo y remuneración que debía percibir el trabajador.

Sobre esta cuestión, afirmó el demandante que había comenzado a trabajar en favor de la accionada el 17 de marzo de 2010 en el establecimiento denominado “La Bolsa”, sito en calle Junín N° 259, de esta ciudad. Dijo que realizaba tareas de Vendedor B, en jornadas que se extendían de lunes a sábados de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

Indicó que percibía por sus tareas una remuneración mensual neta de \$8.250, inferior a la que le correspondía según la escala salarial de la actividad comercial (CCT 130/75). En consecuencia, reclamó las diferencias salariales originadas en la deficiente registración de la relación laboral.

En su versión de los hechos, la demandada las condiciones de trabajo denunciadas en la demanda.

Refirió que era cierto que el señor Falcón había prestado servicios bajo su dependencia laboral, pero no desde el 17 de marzo de 2010, sino desde el 17 de febrero de 2014, tal como figura registrado en sus recibos de haberes.

Asimismo, negó que el actor hubiera realizado tareas como Vendedor B. Por el contrario, dijo que el demandante realizaba tareas de limpieza, ordenaba mercaderías y hacía mandados varios; sin perjuicio de haber ayudado, ocasionalmente, a los vendedores a embalar. Acotó que la venta al público estaba a cargo, principalmente, de Joaquín Alejandro Cortez, encargado del negocio, y de otros empleados (Luis Alberto Ruiz y Rodrigo Carlos Quesada).

Negó, igualmente, que el demandante hubiera cumplido jornadas completas de labor. Por el contrario, aseguró que trabajaba de lunes a sábados de 9:00 a 13:00.

En consecuencia, agregó, Falcón estuvo correctamente registrado como Maestranza, según CCT 130/75, aplicable a los empleados de comercio. De allí que percibiera la remuneración correspondiente a sus reales condiciones laborales.

2. Conforme quedó planteada la cuestión, corresponde proceder al análisis de las pruebas pertinentes y atendibles para su resolución.

2.1. Analizado el material probatorio incorporado a la causa, constato que la prueba ofrecida por el demandante consistió en los recibos de sueldo que le fueran otorgados por “La Bolsa’ de León Quispe Flavia”, CUIT 27-93780690-1, correspondientes a los períodos febrero a julio de 2014, y mayo, 1° SAC, julio, agosto y noviembre de 2016 (fs. 16/26).

Surge de dichos instrumentos el pago de las remuneraciones a Gonzalo Emmanuel Falcón, liquidadas según fecha de ingreso el 17 de febrero de 2014 y la categoría de maestranza “1/2 jornada”. Consta el pago del haber básico, y los adicionales por presentismo y, en su caso, por antigüedad.

El demandante aportó también las Cartas Documento que le remitiera la accionada, impuestas en 12 y 20 de diciembre de 2016 (identificadas como CD781382332 y CD780873055, fs. 5 y 6, respectivamente), así como el telegrama obrero que le dirigiera a la demandada en 14 de diciembre de 2016 (CD761161629; f. 12).

2.2. La demandada ofreció como prueba los testimonios de Claudio Alejandro Orquera y Liliana Alejandra Castellina, que no fueron objeto de tachas.

Conforme se desprende de la pertinente acta (23 de diciembre de 2019; f. 156), el testigo Orqueda declaró que conocía a las partes en litigio de la época en que iba a comprar al negocio “La Bolsa”, ubicado en la salida del Mercado del Norte, por calle Junín, desde el año 2014, aproximadamente. Como cliente, dijo haber visto al actor realizar tareas de limpieza en el negocio “La Bolsa”, entre los años 2014 y 2016; que lo veía con el trapeador y por ahí trayendo cosas del depósito. Afirmó haber concurrido al local por las mañanas cuando iba a comprar. Dijo que suponía que el desempeño del actor fue bueno, nunca había visto nada raro. La última vez que vio a Falcón fue en 2016 y desconocía los motivos por los que había dejado de trabajar.

A continuación, la testigo Castellina (f. 157) declaró que conocía a las partes en litigio ya que desde 2014 hasta 2016 compraba en “La Bolsa” bandejitas y todo lo necesario para su actividad, que era la venta de comida. Dijo haber concurrido al local entre 2014 y 2016 y haber visto que el actor prestaba servicios de limpieza; en 2017 ya no lo vio más. Conocía que el señor Falcón realizaba tareas de limpieza porque no estaba en el mostrador atendiendo, la señora estaba cobrando, y él estaba con los tachos y los haraganes. Dijo que ella iba siempre por las mañanas y ahí lo veía; en dos o tres ocasiones había ido por la tarde y no lo había visto. Desconocía las razones por las que el trabajador se había desvinculado.

2.3. En cuanto a los reportes expedidos por Asociart ART S.A. (f. 104), la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (fs. 105/111), la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán (fs. 121/124) y AFIP (fs. 127/129), en tanto solo contienen información relativa a la actividad comercial de la demandada, no aportan datos útiles a los efectos de dilucidar la cuestión bajo análisis.

2.4.- Por último, la accionada ofreció prueba de absolución de posiciones a ser rendida por el actor. De acuerdo con el acta del 13 de diciembre de 2019 (f. 165), Gonzalo Emmanuel Falcón no compareció, pese a haber sido debidamente notificado.

En consecuencia, se ordenó la apertura del sobre conteniendo el pliego de posiciones (agregado a f. 170) y se derivó para su valoración en definitiva el apercibimiento previsto por el artículo 360 del CPCC (ex artículo 325, CPCC), supletorio al fuero.

Cabe recordar que la incomparecencia del absolvente no autoriza a aplicar el apercibimiento de confesión ficta con carácter imperativo, sino que solamente posibilita al Juez a tenerlo por confeso. El valor probatorio de la confesión ficta no es absoluto y, por consiguiente, a los requisitos formales que se vinculan con la citación e incomparecencia, debe agregarse la existencia de elementos corroborantes cuando ha mediado una negativa expresa de la parte en su escrito introductorio o al contestar la demanda.

3. De acuerdo a los términos en que quedó planteada la cuestión, el cuadro fáctico y probatorio antes analizado permite arribar a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la prueba instrumental da cuenta que el actor fue registrado bajo dependencia de Flavia León Quispe desde el 17 de febrero de 2014 y la categoría de Maestranza. Tal lo que fue reconocido por la demandada y respaldado por los recibos de haberes.

Luego, los testigos Orqueda y Castellina fueron coincidentes al afirmar haber visto a Gonzalo Emmanuel Falcón prestando servicios en el local comercial denominado “La Bolsa”, de titularidad de la demandada, en el período comprendido entre 2014 y 2016.

Sobre la base de los testimonios y demás instrumentos aportados, considero que el actor no acreditó que su prestación de servicios en favor de la demandada -contrato por tiempo indeterminado, conforme los artículos 21 y 90, LCT- hubiera tenido inicio con anterioridad a la fecha que figura en los recibos de haberes.

En otras palabras, no está probado que el vínculo laboral se hubiera entablado el 17 de marzo de 2010 y que hubiera sido deficientemente registrado el 17 de febrero de 2014, según denunciara al demandar.

Al respecto, resulta pertinente recordar que quien invoca la existencia de una relación laboral no registrada o, como en este caso, la existencia de una relación laboral con fecha de ingreso anterior a la registrada, es quien debe probarlo. Ello es así porque la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en el propio interés de los litigantes. Es por cierto una distribución, no del poder de probar, que lo tienen las dos partes, sino del riesgo de no hacerlo. No supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo de cada litigante (artículo 302, CPCC, supletorio).

En este sentido, considero que las declaraciones de los testigos dan cuenta de la prestación de servicios del actor desde la época en que fue efectivamente registrado.

Lo expuesto me lleva a concluir que el actor ingresó a trabajar bajo las órdenes de la demandada y ésta procedió correctamente a registrar a su empleado a partir de la fecha en que ésta inició realmente su vinculación, es decir, el 17 de febrero de 2014. Así lo declaro.

4. Corresponde en este punto dilucidar si le fue abonada al actor la remuneración que le correspondía de acuerdo con su categoría y jornada de trabajo, atento a que adujo la existencia de diferencias salariales.

4.1. En lo relativo a la categoría profesional del demandante, cabe recordar que denunció haber sido deficientemente registrado y, por consiguiente, percibía en menos la remuneración correspondiente.

Consideró que ello era así ya que debió haber recibido como contraprestación la suma de \$ 13.500, correspondiente a la categoría de Vendedor B, y no como Maestranza, según el convenio colectivo mercantil.

Al respecto, es dable señalar que tanto el contenido como la calidad del trabajo comprometidos se determinan por la calificación contractual (categoría), que es la tarea o conjunto de tareas sobre las cuales hubo acuerdo de partes como constitutivas de la prestación del trabajador.

La categoría asignada al trabajador es un elemento esencial del contrato de trabajo, define la posición funcional de aquel dentro de la organización empresarial y se encuentra fuera del ámbito de disposición diseñado por el artículo 66 de la LCT. Solo puede ser variada consensualmente.

A su vez, para que las diferencias salariales puedan prosperar no basta con que la calificación efectuada por la demandada sea errónea o inexistente, sino que es necesario demostrar que las tareas que realizaba el trabajador se encontraban comprendidas en una categoría convencional mayor y mejor remunerada.

El CCT 130/75 dispone que a los trabajadores a que se refiere dicho convenio se les asignará la calificación que corresponda en función de las tareas que realicen (cfr. artículo 4°), teniendo en cuenta el carácter y la naturaleza de las que efectivamente desempeñen (cfr. artículo 17).

Las pruebas arrimadas dan cuenta que Falcón estaba registrado como Maestranza, es decir, en la categoría prevista por el artículo 5° del convenio mercantil.

Según dicha norma, se considera personal de maestranza y servicios al que realiza tareas atinentes al aseo del establecimiento, al que se desempeña en funciones de orden primario y a los que realicen tareas varias sin afectación determinada.

Los testigos Orqueda y Castellina afirmaron haber visto al accionante realizar tareas de limpieza en el local comercial “La Bolsa”.

Por otra parte, según quedó planteada la cuestión, estaba a cargo del demandante demostrar las tareas que acreditaran la categoría reclamada.

En tal sentido, la plataforma probatoria *ut supra* analizada anima la conclusión de que no fueron aportados elementos de prueba destinados a acreditar que las tareas desempeñadas por Falcón permitan incluirlo entre el personal que reviste la categoría de Vendedor B, prevista en el CCT 130/75, o en cualquier otra distinta a la que figura en sus recibos de haberes, esto es, de Maestranza, como fuera registrado.

Ello es así ya que las tareas realizadas por el demandante y que fueron probadas encuentran su marco legal dentro de lo previsto en el citado artículo 5° y, específicamente en el inciso a, de dicha norma.

4.2. La cuestión relativa a la jornada de trabajo está, asimismo, íntimamente vinculada con el salario y, por tanto, con el reclamo del demandante en concepto de diferencias salariales.

A efectos de dilucidar esta cuestión, cabe recordar que, en nuestra legislación, no toda jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo configura un contrato a tiempo parcial, sino solamente aquella que

resulta inferior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad (cfr. artículo 92 ter, LCT).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 ter, LCT, el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad.

La modalidad de contratación a tiempo parcial resulta excepcional en nuestro ordenamiento, de modo que era carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicios del trabajador en jornada reducida de labor, frente a la afirmación del trabajador de haber laborado de lunes a sábados de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 (66 horas semanales).

El beneficio que recibe el empleador de este tipo de contrato es que, si respeta dichos límites, abonará la remuneración en proporción al tiempo trabajado. En cambio, si la reducción fuera inferior a los 1/3 hay que pagar la remuneración convencional por jornada legal máxima.

Asimismo, la existencia una jornada de trabajo inferior a la completa, considerada como una excepción al principio general del contrato por tiempo indeterminado de jornada completa, corresponde al empleador.

Desde tal perspectiva, los testimonios aportados se desprende que los declarantes aseveraron haber visto al señor Falcón durante la mañana, sin precisar horarios.

Por otra parte, respecto de la instrumental acompañada con la demanda -consistente en las piezas postales intercambiadas con la patronal y el Acta de Inspección labrada por el funcionario de la Secretaría de Estado de Trabajo (el 26 de octubre de 2015)-, en la que el actor denuncia jornadas completas de labor, cabe señalar que lo manifestado por el actor en su telegrama obrero del 14 de diciembre de 2016, no resulta suficiente para tener por ciertas tales afirmaciones.

En efecto, sin perjuicio de su autenticidad, solo vale como declaración unilateral, sin control de parte y, por lo tanto, no constituye prueba idónea para el resultado pretendido.

En cuanto a las actuaciones administrativas (Acta de Inspección J-20727 y Planilla de Relevamiento de Trabajadores I-1622, del 26 de octubre de 2016), fueron desconocidas por la parte demandada, sin que el actor hubiera procurado probar su autenticidad por otros medios de prueba.

Por lo dicho, no cabe sino concluir que, en tanto han sido aportados los testimonios antes referidos como así también los recibos de sueldo - en los que se registra al actor como personal con media jornada y el pago de los haberes proporcional a cuatro horas de trabajo-, sin que éste hubiera impugnado los datos consignados en los mismos ni aportado prueba alguna que los desvirtúe, como tampoco que quite valor a la información registrada en dichos instrumentos, se encuentra acreditado que el actor prestaba servicios para la demandada a tiempo parcial.

De todo lo dicho se concluye que el trabajador se encontraba debidamente registrado, abonándose sus salarios conforme a su real categoría y jornada, correspondiendo en consecuencia el rechazo del reclamo de diferencias salariales fundadas en tales extremos. Así lo declaro.

Segunda cuestión: causa y justificación de la extinción del contrato de trabajo.

1. Según las postulaciones iniciales de los litigantes no se encuentra controvertido que la empleadora decidió la extinción del vínculo laboral, que formalizó mediante Carta Documento cursada el 16 de diciembre de 2016. Sin embargo, discurren respecto de la causal invocada.

2. Analizadas las pruebas atendibles y pertinentes para resolver la presente cuestión, resulta que el intercambio epistolar mantenido entre las partes acredita que la demandada envió al actor la misiva impuesta el 16 de diciembre de 2016 que, textualmente, dice: “En nombre y representación de la Sra. FLAVIA LEON QUISPE según Poder General realizado por la Escribana María Inés Villafañe de Fuentes. Comunico que la firma que represento lo despide con justa causa a partir de la presente, ya que en fecha 10/12/16 se le solicitó que debía quedarse a prestar servicios con el pago del adicional correspondiente negándose a dicho requerimiento, lo cual trajo aparejado una serie de insultos e injurias en contra de mi persona por lo que hace imposible la prosecución de la relación laboral, por lo que su liquidación final se encuentra a su disposición para ser retirada del local comercial, la certificación de servicios y remuneraciones a partir de los primeros días del mes de enero del 2017. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO”.

Consta que el trabajador respondió mediante Telegrama Ley 23789, fechado en 14 de diciembre de 2016, en los siguientes términos: “Atento a su misiva en la cual me desvincula con justa causa, es que vengo por este medio a rechazar enfáticamente sus pretensiones y le despido con justa causa, siendo que niego en fecha 10-12-2016, haberle insultando e injuriando, tales expresiones son totalmente falaces. La verdad de los hechos es que, el

sábado a la tarde me quedé a trabajar como todos los sábados de 8 a 13 y 17 a 21, lo que le pedí era que me registre la jornada completa, y no me pague adicionales sino TOTALIDAD de la jornada, porque no me cubría los aportes y era menor el monto de mi haber (\$2063 por semana, siendo por debajo de la escala) al que dice la Ley y CCT 130/75, más escala salarial.- Téngase presente que este horario lo tenía de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 21, menos el domingo que era mi descanso, como ud. bien sabe, por ello, le intimo a que en un plazo de 4 días hábiles (art. 255 bis de la lct) proceda a abonarme las liquidaciones final los arts. 233, 232, 245 de la Ley 20744 y la entrega de los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT) más el pago de las diferencias salariales, que surgen obvias de los deficientes recibos, todo bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales en su contra para el cobro de tales créditos. Quedan notificados”.

Luego, la demandada envió la Carta Documento del 20 de diciembre de 2016 por la que expresó: “Rechazo tenor de Telegrama colacionado de fecha 14/12/2016 por improcedente malicioso y fuera de todo contexto legal. Niego todas y cada una de las imputaciones vertidas por ud. en su misiva, comunico que ud percibió su liquidación final tomando la misma y retirándose de mi local comercial con el dinero y los recibos de ley que fue entregado para la correspondiente firma lo cual no realizó, actitud de mala fe la cual será corroborada en la oportunidad procesal pertinente. En nombre y representación de la Sra. FLAVIA LEON QUISPE según Poder General realizado por la Escribana María Inés Villafañe de Fuentes. Comunico que la firma que represento ratifica tenor de despido con causa notificado en tiempo y forma, certificación de servicios y remuneraciones a su disposición en oficinas de la firma a partir de los primeros días de Enero del 2017. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO”.

3. Abocándome al tratamiento de la cuestión planteada cabe recordar previamente que el artículo 243 de la LCT establece como requisitos formales -de modo *ad solemnitatem*- para su eficacia que la comunicación por la cual se denuncie el contrato de trabajo se curse por escrito y que en el instrumento se consigne la expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.

Agrega dicho artículo que una vez invocada la causa de rescisión contractual no se la podrá modificar ni ampliar por declaración unilateral ni en el juicio posterior, imponiéndose así una suerte de “fijeza prejudicial” al acto de invocación de justa causa de rescisión.

A su vez, corresponde analizar si el despido fue justificado o no, que requiere adentrarse en la valoración del cumplimiento o no de los

recaudos legales establecidos en el artículo 242 de la LCT, el que permite que cualquiera de las partes de un contrato lo denuncie en caso de inobservancia - por parte de la otra- de las obligaciones resultantes de este y que configuren “injuria” que por su “gravedad” no consienta la “prosecución” de dicha relación y cuya carga probatoria recae en este caso sobre la demandada por tratarse de un despido directo.

Entonces, el análisis de la justificación del despido con causa exige, preliminarmente, la constatación de la inobservancia por parte del trabajador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo que es el presupuesto objetivo de la injuria.

Comparto el criterio judicial conforme al cual la razón o las razones invocadas para fundar el distracto deben ser claras, precisas y completas; evitando las formulaciones excesivamente vagas y genéricas, las comunicaciones ambiguas y las expresiones que dan por sentados los hechos, por cuanto ello imposibilita a la contraparte estructurar una adecuada defensa frente a las imputaciones ajenas (cfr. CSJT, sent. Nro. 632, 30/06/2014).

La plataforma fáctica y probatoria descripta permite arribar a las siguientes conclusiones.

3.1. En primer lugar, resulta claro que, valoradas y declaradas auténticas las misivas intercambiadas por las partes, el acto que puso fin al vínculo laboral fue la Carta Documento enviada por la empleadora, impuesta el 12 de diciembre de 2016.

En el caso, no se ha producido prueba tendiente a demostrar la fecha de la efectiva recepción de la misiva por parte del actor, no obstante que el hecho de la recepción en sí aparezca admitido.

En ese contexto considero que, en el caso concreto, al no existir elemento de prueba en uno u otro sentido, y ante la aceptación por parte del actor sobre la recepción de la CD enviada por la demandada -es decir, esa misiva entró en su esfera de conocimiento- resulta atinado considerar que el despido operó en la fecha de su imposición, esto es, el 12 de diciembre de 2016. Así lo declaro.

3.2. A tenor del texto de la misiva anteriormente transcripto surge que los hechos determinantes para concluir la relación laboral, atribuidos a Falcón consistieron en que el 10 de diciembre de 2016, a raíz de haberle requerido que se quedara a prestar servicios, insultó e injurió al apoderado de la demandada.

Adujo que lo expuesto configuraba una injuria que hacía imposible la prosecución de la relación laboral.

Sin embargo, en el caso particular, considero que los elementos probatorios arrojados por la demandada no tienen ninguna relevancia para sostener la legitimidad y magnitud del despido.

En consecuencia, cabe concluir sobre la falta de elementos probatorios idóneos que permitan demostrar que efectivamente el trabajador observó un comportamiento contractualmente ilícito, objetivamente grave según las circunstancias y capaz de hacer no exigible a la parte afectada la prosecución de la relación de trabajo (artículo 242, LCT).

Desde esta perspectiva, los antecedentes reunidos en la causa no justifican la medida adoptada por la empleadora que se presenta como una sanción injustificada debiendo cargar con las consecuencias indemnizatorias correspondientes a dicho proceder (artículo 245 y cc. de la LCT). Así lo declaro.

Tercera cuestión: procedencia o no de los rubros e importes reclamados. Defensa de falta de acción opuesta por la demandada.

1. Persigue el actor el cobro de la suma de \$ 281.917,51 (pesos doscientos ochenta y un mil novecientos diecisiete con cincuenta y un ctvs.) o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de indemnización por despido (artículo 245, LCT), indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/preaviso, días trabajados e integración del mes de despido, SAC s/integración mes de despido, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, SAC s/vacaciones no gozadas, diferencias salariales (de los últimos 12 meses) y art. 80 de la LCT.

Corresponde analizar la procedencia de los conceptos reclamados, según lo dispone el artículo 214, inc. 6°, del CPCC, supletorio al fuero.

1.1. Indemnización por despido (artículo 245, LCT). Indemnización sustitutiva de preaviso. SAC s/preaviso: el rubro pretendido resulta procedente (artículo 245 de la LCT) atento a que la extinción del vínculo laboral se produjo mediante despido directo injustificado, dispuesto por la empleadora.

Asimismo, procede la indemnización sustitutiva de preaviso, en virtud de lo dispuesto por los artículos 231 y 232 de la LCT.

Con respecto a la incidencia del sueldo anual complementario sobre el preaviso omitido que, conforme lo establecido por la CSJT en su fallo

“Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani” (sentencia 107, 07/03/2012) sobre el modo de su consideración, debe ser adicionado.

En efecto, resulta ajustado a derecho computar la incidencia del sueldo anual complementario para completar el resarcimiento de la indemnización por omisión de preaviso, respectiva porción de sueldo anual complementario, teniendo en consideración de que dicha indemnización debe ser "equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231". Y es sabido que la remuneración que se devengaría en dicho período de preaviso omitido está compuesta por las que resultarían de pago inmediato a la finalización de cada mes (retribución mensual) y las que son de pago diferido a la finalización del semestre respectivo (sueldo anual complementario).

1.2. Días trabajados e integración del mes de despido. SAC s/integración mes de despido: se admite el reclamo del actor relativo a los días trabajados en diciembre de 2016 y la integración del mes de despido, en atención a la fecha declarada del distracto (el 12 de diciembre de 2016), según lo prescripto en los artículos 74, 103, 138 y 233 de la LCT, y la falta de prueba de su pago.

En cuanto al SAC sobre la integración mes de despido, dado que por una ficción legal el despido producido con responsabilidad indemnizatoria, se considera que surte plenos efectos a partir del primer día del mes siguiente, computándose los días faltantes como salarios por integración mes de despido, ese período devengaría SAC conforme la doctrina de la CSJT en “Pessoa Alfredo y otros vs. SADAIC s cobros” (Sent. 840 del 13/11/1998) “en atención a que dicho concepto forma parte de la indemnización sustitutiva de preaviso (art. 233 2° párrafo LCT)”. El segundo párrafo del art. 233 reza: “Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido”. Consecuentemente, se admiten estos rubros. Así lo declaro.

1.3. SAC proporcional. Vacaciones no gozadas. SAC s/vacaciones no gozadas: corresponde el progreso de los rubros reclamados en concepto de vacaciones no gozadas 2016 y sueldo anual complementario (proporcional 2° semestre 2016), en virtud de no estar probado su pago instrumentado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 156 de la LCT. Así lo declaro.

Con respecto al SAC s/vacaciones, el accionante no tiene acción por este concepto porque el derecho al pago de las vacaciones proporcionales (artículo 156, LCT) no es un salario ni genera sueldo anual complementario, sino que tiene carácter indemnizatorio y el aguinaldo no se liquida sobre indemnizaciones sino sobre rubros remuneratorios (CNAT, Sala IX, 9/11/98, “Mígueles”, DT 1999-A-852; ídem Sala X, sent. 14.283 del 25/04/06, “Candura, Claudio Roberto c/ Dellvder Travel SA y otro”). Así lo declaro.

1.4. Diferencias salariales (de los últimos 12 meses): conforme se resolvió en la primera cuestión, la empleadora abonaba la remuneración al demandante de acuerdo con las reales condiciones en que se desarrolló el vínculo laboral. Por consiguiente, el rubro reclamado deviene improcedente y se rechaza. Así lo declaro.

1.5. Artículo 80 de la LCT: el artículo 3° del Decreto 146/01 al reglamentar el artículo 45 de la Ley 25345 (que agrega el último párrafo al artículo 80 de la LCT) estableció que “El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 (t.o. por Decreto N° 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

En el caso, el trabajador no cursó la misiva requiriendo la entrega de la documentación laboral en los plazos previstos por la norma antes citada. Por otra parte, si bien adjuntó copias de las actuaciones llevadas a cabo ante la Secretaría de Estado de Trabajo (expediente N° 17850/181-F-2016), la demandada desconoció tales instrumentos sin que la parte actora hubiera procurado acreditar su autenticidad por otros medios probatorios.

En consecuencia, el concepto reclamado se rechaza. Así lo declaro.

2. Los rubros declarados procedentes deberán calcularse sobre la base de la remuneración que le correspondía a percibir al actor de acuerdo con lo previsto en el CCT 130/75 y las escalas salariales correspondientes a la fecha del despido, en la cual deben incluirse, asimismo, los rubros no remunerativos.

Ello así, pues a la luz de los precedentes en el orden nacional “Pérez Aníbal Raúl c/ Disco SA” (CSJN, sent. 01/9/2009, Fallos 332:2043) y en especial “González Martín Nicolás vs. Polimat SA y otro s/ Despido” (CSJN,

Sent. 19/5/2010, Fallos 333:699) y “Díaz, Paulo Vicente vs. Cervecería y Maltería Quilmes SA” (CSJN; Sent. 04/6/2013), la disposición del Convenio 95 de la OIT aprobado y ratificado por el Dto. Ley 11.549/56), corresponde incluir los aumentos no remunerativos como parte integrante de la remuneración. Así lo declaro.

3. En cuanto a la pretendida falta de acción opuesta por la demandada, con fundamento en haber abonado la totalidad de los importes adeudados al actor, y en atención a lo resuelto precedentemente, es que tal defensa se rechaza. Así lo declaro.

Cuarta cuestión: intereses. Costas. Planilla. Honorarios.

Intereses: los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago (artículos 128 y 149, LCT).

Para su cómputo se aplicará la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa “Juárez, Héctor Ángel c/Banco del Tucumán S.A. s/Indemnizaciones (sentencia 1422, 23/12/2015) donde ratifica su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del BNA. Asimismo, en la causa “Bravo José Armando c/Los Pumas SRL s/Indemnizaciones” (sentencia 686, 01/06/2017) en la que sostuvo: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago".

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial tuvo en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (artículo 14, CN) y su crédito reviste naturaleza alimentaria; además, tuvo en cuenta la función resarcitoria de los intereses moratorios y la profunda vinculación entre la tasa de interés y la depreciación monetaria en las circunstancias económicas actuales.

Asimismo, en aquel pronunciamiento destacó la función relevante de la casación como unificadora de la jurisprudencia aclarando que "El cambio de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales lejos está de configurar una solución 'única', 'universal' o 'permanente' ya que el criterio propiciado no resulta portador de una verdad absoluta y eterna, sino que por el contrario, conlleva la realización de un juicio histórico, basado en circunstancias económicas, sociales, sociológicas y jurídicas que se verifican en este momento, dejando a salvo que no es imposible, sino probable, que en otro momento a tenor de un cambio sustancial de las actuales circunstancias,

esta Corte podrá revisar el criterio que hoy se establece en materia de intereses moratorios en los créditos laborales en ejercicio de la relevante función nomofiláctica que es privativa de la casación".

Ahora bien, en el caso se ha producido una notable vulneración de la integridad del crédito alimenticio del trabajador (principio de intangibilidad retributiva, conf. artículos 14 bis de la Constitución Nacional, y 120, 131, 137, 149, 208 y ccdtes. de la LCT) y en consecuencia, de su derecho de propiedad, por lo que cabe determinar en el caso concreto qué tasa de interés deberá aplicarse para mantener la intangibilidad de ese crédito del trabajador, tal como lo estableció el precedente jurisprudencial antes mencionado.

En efecto, si comparamos el índice de variación de precios del consumidor (en adelante IPC) desde diciembre de 2016 hasta enero de 2023 con el incremento de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento, podemos verificar lo siguiente: aplicando la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento a 30 días por el período considerado, el incremento del crédito del trabajador sería de un 272%; mientras que si aplicamos la variación del IPC que mencionamos, ese incremento sería de un 1.049%.

Ahora bien, de la misma manera si comparamos el índice de variación del salario mínimo vital y móvil (en adelante SMVM) desde diciembre de 2016 hasta enero de 2023 con el incremento de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento, podemos verificar lo siguiente: aplicando la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento a 30 días desde diciembre del 2016 a febrero de 2023 el incremento del crédito del trabajador sería de un 272%, mientras que si aplicamos la variación del SMVM que mencionamos, ese incremento sería de un 796%.

En consecuencia, si consideramos la media entre ambos índices (IPC y SMVM) es 922% y la comparamos con la variación de la tasa activa antes mencionada, se advierte que aquella media representa más de tres veces a esta tasa de interés.

En definitiva, queda claramente demostrada aquella notable vulneración de la integridad del crédito alimenticio del trabajador a la que hice referencia anteriormente.

Por ello, teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT y de la CSJN como Máximos Tribunales, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, y en función de lo previsto en el artículo 768 del CCCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena a la fecha de esta resolución, se aplicará TRES VECES la

tasa activa para descuento de documentos a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Así lo declaro.

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que en caso de que en la etapa de cumplimiento de sentencia corresponda aplicar el artículo 770 CCCN (anatocismo), se aplicará sobre el monto de condena actualizado solo una vez la tasa activa.

En este sentido, comparto el criterio adoptado por el voto concurrente del Dr. Petracci en el considerando N° 20 del fallo “Massolo, Alberto Jorge c/Transporte del Tejar SA” dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación el 20/04/2010, en el que textualmente se dijo: “Que, sin perjuicio de lo expresado, no puede dejar de señalarse que tanto el Tribunal (conf. Fallos: 315:158, 992 y 1209) como la doctrina especializada han reconocido en la tasa de interés un remedio para dicha situación, lo que deberá ser también evaluado por los jueces de la causa como una alternativa para evitar que los efectos de la depreciación monetaria que tuvo lugar durante la crisis económica y financiera, incidan solamente sobre quien fue la víctima del daño, tema para el cual los magistrados deben ponderar los antecedentes del caso y las circunstancias económicas del momento para determinar con criterio prudencial el interés aplicable”.

Por otra parte, la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VIª, en los autos "Jiménez Ricket c/Bustos" determinó: “Los jueces de grado tienen la facultad de fijar la tasa de interés de los créditos conforme a la situación existente al momento del dictado de la sentencia. Es el criterio que estableció la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (en adelante, CSJT) en el juicio caratulado 'Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otro s/ daños y perjuicios' (sentencia 937/14): es función de los jueces de grado aplicar la tasa de interés que consideren adecuada para garantizar el justo resarcimiento del acreedor, lo cual debe ponderarse al momento del dictado de sentencia. En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal expresó: “El juez debe aplicar, de conformidad al art. 768 del Código Civil, los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado.

Como no existe norma legal alguna que determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o de la activa, es discrecional del juez determinar la tasa aplicable, teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria de la norma y el contexto socioeconómico existente al momento del fallo”.

Conforme a estos parámetros, cabe tener en cuenta que el proceso inflacionario que viene registrando nuestro país en los últimos años (acrecentado con la subida del dólar) es una realidad innegable que ha vulnerado el valor del crédito del trabajador, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a nuestro Derecho Positivo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la OIT, conforme artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

En este contexto, es función primordial de los jueces de grado hacer prevalecer estos derechos constitucionales del trabajador; ello conlleva la facultad y el deber de fijar intereses acordes a la realidad socioeconómica del país, a fin de evitar que el deudor moroso quede colocado en una situación mejor luego del incumplimiento, lo que implicaría una injusta recompensa para quien no cumplió sus obligaciones en tiempo oportuno, todo en un marco de equidad y de justicia.

En el mismo sentido, es criterio de nuestro Tribunal local cuando manifestó: “...El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo...los magistrados deben quedar en libertad para estudiar y resolver en cada causa en las que intervengan, cuál es la tasa aplicable para dar una respuesta apropiada a la justicia del caso concreto y a la realidad económica, de la cual los jueces no deben encontrarse abstraídos. Es que la razonabilidad de los criterios judiciales en materia de tasa de interés judicial puede entrar en una crisis cuando se suprime al magistrado la facultad de aplicar las normas en forma flexible de modo de acercar la solución más justa al caso concreto...la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros en la determinación final de la misma y su adecuación a las circunstancias del caso. A su vez, en la especie, la parte recurrente no explica cuáles serían las razones que demostrarían la arbitrariedad, ilogicidad o absurdidad en la decisión de la Cámara sobre la tasa de interés aplicable...El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán...comparto también el voto del señor vocal doctor Antonio Gandur...corresponde dejar librado a la prudente apreciación de los jueces de mérito de la causa la aplicación de una tasa que, conforme las circunstancias comprobadas del caso, cumpla la función de otorgar un razonable interés al capital de origen, reservándose esta Corte el control último de razonabilidad en dicha apreciación...” (CSJT en causa, “Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Armando y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia, 23/09/2014).

Por último, cabe destacar que la decisión de incrementar la tasa activa en virtud de los parámetros previamente expuestos, se ha convertido en el criterio mayoritario en el fuero laboral local (cfr. CAT, Sala 6, “Gonzalez José Fernando c/Status SRL”, sentencia 93, 28/05/2019; Sala 1, “Lazarte María Graciela del Valle c/Aegis Argentina SA”, sentencia 30, 16/05/2022; Sala 6, “Jimenez Ricket Fimma Macarena c/Bustos Mercedes Eliana”, sentencia 150, 20/10/2021; entre otros).

Costas: atento al resultado arribado en autos, las costas procesales se imponen de la siguiente manera: la parte demandada soportará la totalidad de las propias más el 90 % de las generadas por el actor, en tanto este último asumirá el 10 % restante. Ello, Ello, según lo normado por los artículos 14 y 49 del CPL, y 61 y 63 (ex artículos 105 y 108), del CPCC. Así lo declaro.

Planilla de capital e intereses:

Falcon Gonzalo Emmanuel - León Quispe Flavia

Ingreso 17/02/2014
Egreso 12/12/2016
Antigüedad 2 años, 9 meses y 25 días
Categoría Maestranza A (CCT 130/75)

Remuneración devengada

Media jornada

	nov-16
Básico	\$ 6.452,75
Antigüedad	\$ 129,06
NR	\$ 645,28
Presentismo	\$ 602,26
Total	\$ 7.829,34

<u>Mejor remuneración mensual normal y habitual devengada -nov16</u>	\$ 7.829,34
<u>1). Indemnización por antigüedad</u>	\$ 23.488,01
\$ 7.829,34 x 3	
<u>2). Preaviso</u>	\$ 7.829,34
\$ 7.829,34 x 1	
<u>3). SAC/ preaviso</u>	\$ 652,44
\$ 7.829,34 / 12	
<u>4). Mes integrado dic-16</u>	\$ 7.829,34
Días trabajados	\$ 3.030,71
\$ 7.829,34 x 12 / 31	
<u>Integración mes de despido</u>	\$ 4.798,63
\$ 7.829,34 x 19 / 31	
<u>5). SAC/ integración mes de despido</u>	\$ 399,89
\$ 4.798,63 / 12	
<u>6). 2° SAC proporcional 2016</u>	\$ 3.523,20
\$ 7.829,34 / 2	
Proporción 90,00%	
<u>7). Vacaciones proporcionales 2016</u>	\$ 4.156,20

\$ 7.829,34 x 13,27 / 25
Ds. Vac. 13,27

Total \$ al 12/12/2016		\$	47.878,41
Interés tasa activa Banco Nación al 31/01/2023	815,81%	\$	390.598,99
<i>*Se tomó 3 veces la TNA</i>			
Total \$ al 31/01/2023		\$	438.477,40

Honorarios: corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46, inc. 2, de la Ley 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la acción, es de aplicación el artículo 50, inc. 2, del digesto procesal citado, por lo que a los fines de la regulación se tomará como base regulatoria el monto actualizado de la demanda, el que al 31/01/2023 asciende a la suma de \$961.531,92; a dicha suma se le aplica el porcentaje del 45%, quedando reducida la base a la suma de \$ 432.689,36.

Determinada la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito, lo dispuesto por los artículos 12, 14, 15, 39, 43 y concordantes de la Ley 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24.432 ratificada por la Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1. Al letrado Cristian Marcelo Soria (M.P. 7193) por su actuación en la causa como apoderado del actor, en el doble carácter, en dos etapas y media del proceso de conocimiento, en la suma de \$ 72.656 (base x 13 % + 55 %/3 x 2,5). Por aplicación de lo normado por el artículo 38 in fine, Ley 5480, corresponde regular honorarios en la suma de \$ 116.250 (valor de una consulta escrita + 55% por doble carácter).

2. A la letrada Noelia Karina Díaz (M.P. 9031) por su actuación en la causa como apoderada de la demandada, en el doble carácter, en dos etapas del proceso de conocimiento, en la suma de \$ 35.769 (base x 8 % + 55 %/3 x 2). Por aplicación de lo normado por el artículo 38 in fine, Ley 5480, corresponde regular honorarios en la suma de \$ 116.250 (valor de una consulta escrita + 55% por doble carácter).

Por ello,

RESUELVO

I. ADMITIR PARCIALMENTE la demanda incoada por Gonzalo Emmanuel Falcón, DNI 35.815.551, domiciliado en calle N°6 S/N, entre calles 39 y 41, mza. P, casa 6, Las Talitas, Tafí Viejo, en contra de Flavia León Quispe, DNI 93.780.690, domiciliada en Av. Alem N° 1896, San Miguel de Tucumán. En consecuencia, se condena a la demandada al pago, en el plazo de diez días, de la suma total de **\$ 438.477,40**, en concepto de indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC s/preaviso, días trabajados de diciembre de 2016 e integración del mes de despido, SAC s/integración mes de despido, SAC proporcional (2° semestre de 2016) y vacaciones no gozadas (2016). **RECHAZAR** el reclamo del actor en concepto de SAC s/vacaciones no gozadas, diferencias salariales (últimos 12 meses) y artículo 80 de la LCT, por lo considerado, absolviéndose a la demandada de estos rubros e importes.

II. COSTAS, en las proporciones consideradas.

III. REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento al letrado Cristian Marcelo Soria (M.P. 7193), en la suma de \$ 116.250. A la letrada Noelia Karina Díaz (M.P. 9031), en la suma de \$ 116.250.

IV. PLANILLA FISCAL, oportunamente practicar y hacer reponer (artículo 13, Ley 6204).

V. COMUNICAR a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRAR, ARCHIVAR Y HACER SABER. SIE 254/18 **FIRMADO DIGITALMENTE**

Certificado Digital:

CN=TOSCANO Leonardo Andres, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20273642707, Fecha:27/02/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>